

C.A. de Santiago

Santiago, siete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos RIT 1886-2024 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC N° 2400308324-8, por sentencia de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, la juez señora Karin Mercado Rivas, condenó a Rodrigo Andrés Caro Soto a sufrir la pena de trescientos un días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor del delito de amenazas del N° 3° del artículo 296 del Código Penal, cometido en la comuna de Ñuñoa el diecisiete de marzo del año dos mil veinticuatro; dicha pena la debe cumplir el sentenciado en forma efectiva, sirviéndole de abono el tiempo consignado en el fallo.

La defensa de Caro Soto impugnó la sentencia mediante la interposición de un recurso de nulidad que se fundó, en lo principal, en la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y al artículo 297, todas disposiciones del Código Procesal Penal. En subsidio, fundó su recurso en la causal de la letra b) del artículo 373 del citado texto legal, con relación al artículo 296 N° 3° del Código Penal, por errada aplicación.

Esta Corte, el día veintiocho de enero del año en curso, oyó a la parte recurrente y a un representante del Ministerio Público; enseguida, arribó a un acuerdo y fijó para el día de hoy la comunicación de esta sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que sostiene la parte recurrente que la sentencia se encuentra viciada, en primer término, por la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y al artículo 297, todas normas del Código Procesal Penal, por cuanto el tribunal *a quo* da por establecido el hecho que le permite concluir que se está en presencia del delito de amenazas y que su parte es el autor, con una errada valoración de la prueba, hecha en el motivo quinto, que contiene un “exiguo análisis” de los antecedentes. Refiere el recurrente que le atribuye valor a la declaración de los testigos, funcionarios policiales, el teniente, señor Andrés Manuel Aravena Jeldres y la subteniente, doña Gloria Belén Aburto Marín, pero estos no dijeron en sus testimonios que oyeron las amenazas que se dieron por



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXUEXSXKYVQ

ciertas y que habrían sido proferidas por el acusado a un tercero, en la plaza Ñuñoa. Estos testigos sólo dan cuenta de las incoherencias e insultos que gritaba Caro Soto, pero no de palabras amenazantes. Luego, la prueba aportada al proceso no es la idónea para dar por demostrada la existencia del hecho punible.

SEGUNDO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e).*

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.*

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.*

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

TERCERO: Que, entonces, la legislación procesal penal no ha dado libertad absoluta a los jueces del fondo a la hora de valorar la prueba rendida y establecer tanto el delito como la participación, pues siempre aquellos han de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que los conduce a resolver en un determinado sentido. Luego, más que de no vulnerar algún principio de la lógica filosófica o de indagar en las ideas de Leibniz o de algún otro pensador, se trata, simplemente, en la labor de ponderación de la



prueba, de respetar el sentido común, la sensatez y de ahí que la octava acepción de la palabra “*lógica*” dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la que más se adecua a la que el legislador menciona en el citado artículo 297: “*Modo de pensar y de actuar sensato de sentido común*”. De hecho, Couture, si bien se explaya latamente sobre el tema, resume el significado de las reglas de la sana crítica como “*las reglas del correcto entendimiento humano*”.

CUARTO: Que el tribunal *a quo* valoró la prueba y arribó a la conclusión de que los hechos demostrados son los mismos del requerimiento, razón por la cual dio por establecido que “con fecha siete de marzo del año dos mil veinticuatro, aproximadamente a las 20:15 horas, el requerido, Rodrigo Andrés Caro Soto, se encontraba en la plaza Ñuñoa, ubicada en la intersección de Manuel de Salas con avenida Irarrázaval, comuna de Ñuñoa, lugar donde recogió un palo de madera (sic) desde las plantas del sector, el cual comienza a agitar, para acercarse a la víctima, el señor Mario Vásquez Figueroa, a quien sin motivo le señaló ‘culiados venezolanos, culiados, ahora se las van a ver’, continuando con movimientos del palo, dando golpes violentos en el aire, el cual se lo exhibía a él y los transeúntes. Tras un par de minutos perdió dicho palo y recogió otros dos y se acercó nuevamente a la víctima y le manifestó, mientras agitaba el palo, ‘ahora vas a ver lo que te va a pasar por meterte’, motivo por el que fue retenido y entregado a Carabineros.

QUINTO: Que, para establecer el presupuesto fáctico anterior, el tribunal de garantía tuvo en consideración los siguientes antecedentes: 1) la declaración del testigo señor Andrés Aravena Jeldres, funcionario policial, quien relata que estaba patrullando el sector de plaza Ñuñoa el día diecisiete de marzo del año pasado, cerca de las 20:45 horas, junto con la teniente Aburto, y se acercó un sujeto señalándole que otro individuo, apodado “Tomate”, lo había amenazado con palos. Vieron al individuo en cuestión cuando tomaba otros palos; el individuo estaba ebrio; 2) la declaración de la funcionaria policial Gloria Elena Aburto Marín, quien narra que el día y hora señalados estaba patrullando la plaza Ñuñoa junto a su compañero y algunas personas se les acercaron y le dijeron que un sujeto los estaba amenazando con palos de madera; describe al individuo y señala que hablaba incoherencias porque estaba ebrio y al subir al carro los amenaza



con que les iba a sacar la “concha de su madre”; 3) esta última testigo afirma, además, que el señor Mario Vásquez le señaló que el individuo en cuestión amenazaba a la gente con palos y que señalaba que los niños debían jugar en la plaza y no los venezolanos, añadiendo la testigo que ella presencié varias de las frases amenazantes del requerido; y 4) fotografía de uno de los palos usados.

SEXTO: Que examinando la ponderación de la evidencia que hizo el tribunal de garantía en el razonamiento quinto, se comprueba que ha sido el sentido común, o “las reglas del correcto entendimiento humano”, lo que ha gobernado a la sentenciadora a la hora de ponderar la prueba aportada al proceso y que, al contrario, sólo la sinrazón, habría permitido arribar a la conclusión de que no estaba demostrada la existencia del hecho punible y la participación del encausado.

SÉPTIMO: Que, en efecto, es cierto que la víctima, señor Vásquez, no declaró en el proceso, pero los dos funcionarios policiales referidos no sólo fueron testigos de oídas de este, sino que presenciales de uno de los momentos en que el requerido blandía un palo y amenazaba no sólo a Vásquez, sino a los propios funcionarios policiales. Luego, el correcto entendimiento de la magistrada del tribunal de garantía la llevó a concluir lo obvio: el requerido, señor Caro Soto, el día y hora de los hechos, blandiendo palos, amenazaba a la gente de la plaza Ñuñoa, especialmente al señor Vásquez, y los instaba a abandonar la plaza para que jugaran los niños, añadiendo que los venezolanos tenían que irse. Luego, ninguna vulneración existe al artículo 297 del Código Penal en el establecimiento del presupuesto fáctico en esta causa.

OCTAVO: Que una segunda causal de nulidad la hace consistir la defensa del requerido en la que contempla la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la que se hace consistir en la, en su concepto, equivocada aplicación del artículo 296 N° 3° del Código Penal, pues los hechos asentados por el tribunal *a quo* no constituyen el ilícito previsto y sancionado en la citada norma.

NOVENO: Que procede esta causal, entre otras hipótesis, para el evento de una aplicación indebida de una norma, esto es, que a



determinados hechos se les haya dado una calificación jurídica equivocada, correspondiendo una calificación distinta, que es precisamente lo que arguye la parte recurrente. Para lo anterior, el tribunal revisor —esta Corte de Apelaciones— ha de hacer una comparación entre los hechos fijados y el derecho aplicado, y decidir si existe o no el yerro que se denuncia.

DÉCIMO: Que los hechos asentados en la sentencia ya se han transcrito en el considerando cuarto de esta sentencia que, en lo que interesa, describe que el requerido recogió un palo desde las plantas del sector de plaza Ñuñoa, lo blande, se acerca a la víctima, el señor Mario Vásquez Figueroa, diciéndole “culiados venezolanos, culiados, ahora se las van a ver”, continuando con su actitud de blandir el palo, dando golpes violentos en el aire, recogiendo luego un segundo palo y reiterando su conducta.

Por su parte, el N° 3° del artículo 296 del Código Penal señala lo que sigue: “El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado: 3.° Con presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere condicional; a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado, caso en el cual se impondrá ésta”.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, la adecuación típica que hizo el tribunal de garantía es la correcta, no ha cometido yerro jurídico alguno, como lo cree la parte recurrente, pues ciertamente, el blandir un palo y acercarse violentamente a una persona —o a varias— haciendo movimientos violentos con dicho elemento, gritando e insultando y ordenando que se fuera de la plaza en cuestión, constituye una amenaza de causar un mal, la que ciertamente es seria y verosímil, pues tal conducta debe entenderse real, verdadera, no hay un intento de burla o de disimulo o de hacer una broma, pareciendo creíble o posible que este sujeto pudiera lesionar a terceros con el aludido palo.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, se desestimaré el recurso deducido.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa de Rodrigo Andrés Caro Soto, en contra de la sentencia de doce de



diciembre de dos mil veinticuatro, pronunciada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y notifíquese.

N°Penal-60-2025.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministra (S) señora Soledad Orellana Pino y por la abogada integrante señora Magaly Correa Farías. No firman el ministro señor Mera por encontrarse realizando una suplencia en la Excma. Corte Suprema ni la ministra (S) señora Orellana por haber terminado su suplencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXUEXSXKYVQ

Proveído por la Presidenta de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a siete de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXUEXSXYVQ